

## -Estados Unidos



En febrero de 2026, la deuda pública de Estados Unidos alcanzó 56 trillones de dólares.

Foto: cbsnews.com

# ¿Quién paga en realidad?

Una estrategia evidente de la desconexión entre los objetivos políticos y los efectos económicos sobre la población, que sufre las peores consecuencias

Por AMAYA RUBIO ORTEGA

LOS aranceles han sido la herramienta favorita de Donald Trump para reescribir las reglas del comercio global y aplicar presión internacional. A finales de febrero de 2026, el mandatario republicano anunció en la red **Truth Social** que, con efecto inmediato, elevaría el gravamen mundial del 10 por ciento al 15 y adelantó que su administración definiría los nuevos impuestos en los próximos meses.

La declaración se produjo tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de invalidar buena parte de las tasas a la importación impuestas durante 2025. Con una mayoría de seis votos contra tres, el alto tribunal determinó que el Ejecutivo había abusado de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, al emplearla como sustento para

aplicar gravámenes de amplio alcance. Según el fallo, dicha legislación no autoriza al presidente a crear nuevas contribuciones comerciales en tiempos de paz.

Estados Unidos llegó a acumular en febrero de 2026 una deuda pública impagable de 56 trillones de dólares, más de 124 por ciento de su Producto Interno Bruto. De acuerdo con la Congressional Budget Office, el déficit presupuestario es de 1.9 trillones. Estas cifras se financiaban en gran medida gracias al resto del mundo, que aceptaba papeles sin respaldo –entre ellos petrodólares y bonos del Tesoro– a cambio de bienes reales: petróleo, minerales, alimentos y manufacturas.

Lejos de contar con una base productiva suficiente para sostener ese endeudamiento, el país

ha visto cómo su propia élite económica trasladó capitales e industrias a los llamados países del Tercer Mundo, en busca de mano de obra barata. El antiguo capitalismo industrial, orientado a la producción de bienes, dio paso a una fase financiera centrada en la especulación y la generación de rendimientos ficticios, mientras las grandes fortunas se blindaban frente a una carga fiscal efectiva.

En 1977, los patrimonios más elevados tributaban tasas cercanas al 70 por ciento; hoy no sobrepasan el 22 por ciento, y gran parte de sus beneficios se canaliza a través de paraísos fiscales o fundaciones exentas de impuestos. Estas estructuras, además, financian campañas electorales que posteriormente se traducen en amnistías y condonaciones fiscales. En contraste, los salarios

de los trabajadores y el gasto civil del Estado permanecen prácticamente estancados desde la década de 1970, pese a la inflación y al crecimiento de la población.

### **El verdadero costo de los aranceles**

Desde la Casa Blanca, el incremento de ingresos por aranceles se presenta como una pieza clave en el “rompecabezas económico” republicano. Sin embargo, en medio de esos discursos, persiste una pregunta esencial para millones de ciudadanos: ¿quién paga realmente los aranceles impuestos por la administración Trump?

Incluso si se cumplieran las previsiones más optimistas del Tesoro, que estiman ingresos aduaneros cercanos a los 300 000 millones de dólares este año, esa cifra apenas representaría 4.5 por ciento del presupuesto federal, un aporte pobre en las finanzas públicas.

El relato oficial insiste en que “otros” –es decir, los países exportadores– acabarán pagando la cuenta. Sin embargo, los datos y la experiencia contradicen esa afirmación. Un estudio detallado de la Asociación Económica Americana sobre los aranceles

durante el primer mandato de Trump reveló que los importadores estadounidenses absorbieron el 95 por ciento del costo total. Es decir, el impacto no se quedó en China, México o Vietnam: cruzó fronteras y acabó en los bolsillos locales.

Desde el punto de vista legal, los derechos de aduana son abonados por los importadores –mayoristas o minoristas– en el momento en que la mercancía ingresa en el país. Pero ese sobrecosto suele trasladarse, total o parcialmente, al consumidor final, mediante precios más altos, convirtiendo a los hogares en los verdaderos pagadores de la política arancelaria.

### **Efectos reales de “America First”**

Paradójicamente, aunque el déficit comercial se redujo momentáneamente el año pasado, mantener esa tendencia parece poco sostenible. Pese a las barreras proteccionistas, la economía estadounidense sigue siendo altamente dependiente de las importaciones, en especial en sectores estratégicos: tecnología, maquinaria y bienes de consumo. Desde noviembre de 2024 muchas empresas adelantaron compras del exterior para

anticiparse a la entrada en vigor de los aranceles. Esto les ha permitido amortiguar el impacto: algunas han absorbido parte de los costos, mientras que otras venden existencias acumuladas sin trasladar el impacto de inmediato al consumidor.

No obstante, las medidas encarecen las importaciones sin garantizar su reemplazo por producción nacional. En numerosos casos las compañías no cuentan con proveedores locales capaces de competir en precio, escala o capacidad inmediata, esto deja al descubierto las limitaciones de una reindustrialización por decreto.

La estrategia de Donald Trump, si bien incrementa la recaudación, lo hace a costa del poder adquisitivo de millones de ciudadanos. En un país donde la brecha de desigualdad se ensancha, utilizar los aranceles como herramienta recaudatoria puede terminar siendo un bumerán social y electoral. La verdadera prueba pasará por las urnas el próximo noviembre, durante las elecciones de medio término, cuando la pregunta ya no sea solo si los aranceles funcionan, sino a quién realmente están beneficiando... y a quién están castigando.

**Los aranceles reducen el poder adquisitivo de millones de hogares, especialmente los de menores ingresos. Foto: csmonitor.com**

